

**CARME MOLINERO
PERE YSÀS**

DE LA HEGEMONÍA A LA AUTODESTRUCCIÓN

EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (1956-1982)



CRÍTICA

Carme Molinero y Pere Ysàs

DE LA HEGEMONÍA A LA AUTODESTRUCCIÓN

*El Partido Comunista de España
(1956-1982)*

CRÍTICA
BARCELONA

Primera edición: enero de 2017

De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982)
Carme Molinero y Pere Ysàs

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© Carme Molinero Ruiz y Pere Ysàs Solanes, 2017

El editor hace constar que se han realizado todos los esfuerzos para localizar y recabar la autorización del propietario del copyright de la imagen que ilustra esta obra, manifiesta la reserva de derechos de la misma y expresa su disposición a rectificar cualquier error u omisión en futuras ediciones.

© Editorial Planeta S. A., 2017
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
Crítica es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

editorial@ed-critica.es
www.ed-critica.es

ISBN: 978-84-16771-38-7
Depósito legal: B. 24.806 - 2016
2017. Impreso y encuadernado en España por Black Print

Índice

<i>Introducción</i>	9
-------------------------------	---

PRIMERA PARTE

1. DE LA RESISTENCIA AL DESPLIEGUE DEL ACTIVISMO SOCIAL	17
Nueva dirección y nueva política	20
La huelga nacional política y la estrategia antifranquista	26
La crisis de 1964.	30
La renovación de la militancia y el activismo comunista en CC. OO.	37
El movimiento estudiantil entra en escena.	47
Por un partido de masas. La alianza de fuerzas del trabajo y de la cultura.	58
El distanciamiento público de la URSS y la vía nacional al socialismo.	64
2. UNA SOCIEDAD EN EBULLICIÓN, UN PARTIDO EN TRANSFORMACIÓN.	71
En «estado de excepción».	71
Salir a la superficie para crear espacios de libertad	76
El VIII Congreso y el despliegue de la política comunista en la crisis del franquismo.	81
Una movilización <i>in crescendo</i>	90
Una militancia heterogénea.	95

El fortalecimiento del partido	100
Ante los últimos latidos de Franco	107
3. LA POLÍTICA DE ALIANZAS Y EL «EUROCOMUNISMO»	111
Del Pacto para la Libertad a la Junta Democrática de España	111
Unidad de la izquierda y socialismo en libertad	126
El Manifiesto Programa. La etiqueta «eurocomunista»	132
4. DEL FRANQUISMO SIN FRANCO A LAS ELECCIONES GENERALES	141
El debate en torno a CC. OO.	141
Ante el franquismo sin Franco	151
La unidad opositora y la alternativa democrática	158
Roma, capital de España.	166
El éxito de Suárez y el cambio de escenario.	181
Forzando el paso.	189
La legalización	196
Hacia las elecciones	208

SEGUNDA PARTE

5. EN LAS INSTITUCIONES	217
Las elecciones del 15 de junio	217
La política de concentración democrática	221
Los Pactos de la Moncloa	229
La Constitución	240
En las instituciones preautonómicas	252
Las elecciones de 1979	256
6. EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES	269
En el movimiento sindical	271
En los movimientos ciudadanos	287
7. DEMOCRACIA Y SOCIALISMO: EL IX CONGRESO	303
El proceso precongresual	306
El informe del Comité Central al IX Congreso	312
El «actual proceso de cambio»	318
La «democracia política y social», etapa hacia el socialismo	326
El partido y su dirección	334

8. LA CRISIS	343
Primeras tensiones importantes.....	347
El V Congreso del PSUC.....	361
El X Congreso	367
Crisis en el País Vasco y en Madrid.....	382
1982, <i>annus horribilis</i>	392
CONCLUSIONES	399
ANEXO.....	411
NOTAS.....	421
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	483
ÍNDICE DE SIGLAS	493
ÍNDICE ANALÍTICO.....	495

PRIMERA PARTE

1

De la resistencia al despliegue del activismo social

La experiencia nos ha enseñado a nosotros, comunistas españoles, ha enseñado al movimiento comunista mundial, que bajo las condiciones del fascismo no es posible defender a los trabajadores desarrollando organizaciones de masa ilegales, de oposición. El régimen policiaco y terrorista impide su desarrollo y actividad. Esa misma experiencia nos ha enseñado que tratar de crear tales organizaciones de masa, de oposición, conduce a aislar los elementos de vanguardia del conjunto de los obreros y los trabajadores.

Santiago Carrillo,
«Sobre las experiencias
de dos años de lucha», 1948

La razón principal para utilizar el término «sindicato» cuando creamos el SDEUB era la oposición y el contraste con el «sindicato» realmente existente, el del régimen franquista: frente a este sindicato, de origen fascista, antidemocrático, queríamos una organización libre y democrática, propia de los estudiantes... frente a SEU, SDE. Para un estudiante de entonces, y creo que esto se puede decir lo mismo para Barcelona que para Madrid, el peso de la diferencia recaía en la «D», no en la «S». Pudo haber en las cabezas de los estudiantes que conocían la historia de la FENEC y la FUE una razón adicional: tampoco se quería volver al pasado.

Francisco Fernández Buey,
Memoria personal de la fundación
del SDEUB (1965-1966), 2006

Cuando en los últimos años de la década de los cuarenta se consolidó plenamente la guerra fría, los comunistas llegaron al convencimiento de que la dictadura franquista sólo podría ser derrocada a través de la

oposición interior, una percepción que la firma de los pactos con Estados Unidos en 1953 no hizo más que confirmar. Era claro igualmente que la vía insurreccional y la lucha guerrillera llevaban a un callejón sin salida al margen de los altísimos costes humanos que tenía.¹ De esa constatación y, al parecer, de los consejos de Stalin, derivó un cambio estratégico fundamental que, sin embargo, fue bautizado como cambio táctico en 1948. El «cambio táctico», que implicaba el abandono de la lucha armada y la perspectiva insurreccional, partía de la base de que el derrocamiento del régimen exigía que la lucha política se vinculase a las masas, que en aquellos años eran sinónimo de obreros, para lo cual se optaba por utilizar las posibilidades legales que ofrecían las organizaciones de masas franquistas,² en particular la Organización Sindical Española y las elecciones de «enlaces sindicales», como terreno en el que impulsar la lucha antifranquista mediante la atención a las necesidades de los trabajadores y, dadas las características de las políticas franquistas, conseguir su movilización también por objetivos políticos.

Quizá por el aislamiento, quizá porque el rechazo visceral al contacto con las organizaciones de la dictadura era profundo entre los escasos militantes comunistas, la cuestión es que la dirección del partido tuvo que emplearse a fondo para convencerles de la necesidad de presentarse a las elecciones sindicales si querían conseguir la movilización de los trabajadores. Santiago Carrillo sostuvo en el artículo citado de *Nuestra Bandera*:

La experiencia nos ha enseñado a nosotros, comunistas españoles, ha enseñado al movimiento comunista mundial, que bajo las condiciones del fascismo no es posible defender a los trabajadores desarrollando organizaciones de masa ilegales, de oposición. El régimen policiaco y terrorista impide su desarrollo y actividad. Esa misma experiencia nos ha enseñado que tratar de crear tales organizaciones de masa, de oposición, conduce a aislar los elementos de vanguardia del conjunto de los obreros y los trabajadores.

Era la única fórmula para no continuar aislados lo que, por otro lado, comportaría quedar «en medio del campo de batalla solos, descubiertos».³

Santiago Carrillo argumentaba que si se atendían prioritariamente las necesidades de los trabajadores en el día a día no sería difícil en-

contrar argumentos para la protesta. Incluso los dirigentes franquistas eran conscientes de que las políticas desarrolladas habían sido decisivas para el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Así, al iniciarse los años cincuenta, el racionamiento y el mercado negro continuaban siendo el símbolo de la miseria cotidiana y, como había señalado la Policía de Oviedo hacía ya algunos años, la «aparente normalidad no refleja el sentir de la clase trabajadora, que con salarios bajos considerando la carestía de la vida, y con las grandes dificultades que encuentran para abastecerse de los artículos de primera necesidad, estraperlados entre gente de posición, ven en el nuevo Régimen la continuación del sistema político imperante en España antes del Glorioso Movimiento, en que se hacía labor de partido y no nacional, condenando una clase social al sacrificio, en beneficio de otra que disfrutaba de su privilegio». Como consecuencia, «los descontentos enemigos que integran la masa trabajadora especialmente [...] han llegado actualmente a formar una masa, lo suficientemente preparada y abonada, para que sirva de medio al desarrollo de las doctrinas disolventes y anti-españolas, que no encuentran otro obstáculo a su afianzamiento que el temor a la represión».⁴

Efectivamente, el malestar acumulado durante más de una década era amplísimo y solo era necesario que se dieran las condiciones mínimas necesarias para que el rechazo a una situación insostenible estallara en las zonas más industrializadas y de mayor concentración obrera. Ello ocurrió en Barcelona a partir de un hecho puntual —el aumento del precio del tranvía en un 40%, confirmado a diferencia de lo que sucedió en Madrid, donde las protestas falangistas llevaron al Gobierno a retrotraer el incremento—. Ante unas autoridades atónitas, el boicot a los tranvías empezó antes de la fecha prevista y en él participaron sectores sociales diversos. Después de cinco días de boicot, durante los cuales se sucedieron las actuaciones represivas gubernamentales, el aumento de tarifas fue anulado.⁵ Al éxito de la protesta sucedió la convocatoria de una huelga estrictamente obrera por parte de los enlaces sindicales. Según la prensa extranjera, en ella participaron entre 250.000 y 500.000 trabajadores barceloneses y de las comarcas industriales de su entorno. Más allá de las cifras, de la magnitud de los acontecimientos es ilustrativa la exclamación del gobernador civil, Eduardo Baeza Alegría: «La masa se había hecho dueña de la calle».⁶

El éxito del boicot a los tranvías y la huelga posterior de marzo de 1951 en Barcelona confirmaron el acierto de la táctica de intentar que

salieran elegidos como enlaces sindicales militantes comunistas y, a través de su influencia, trabajadores sin compromiso político pero dispuestos a luchar en defensa de sus compañeros y, por lo tanto, en contra de la Organización Sindical Española (OSE). Se estaban poniendo las bases para la reorganización del movimiento obrero. En los meses siguientes se produjeron movilizaciones en otros territorios: el País Vasco, Navarra e intentos en ciudades como Madrid.⁷

No fue, sin embargo, hasta la primavera de 1956 cuando se produjo una nueva oleada de protestas obreras; habían pasado veinte años desde el final de la guerra civil y el poder adquisitivo de los asalariados todavía no había alcanzado el nivel de preguerra. Las movilizaciones pretendían compensar una inflación galopante, pero lo que es significativo es que los militantes clandestinos jugaron un papel esencial a la hora de extender la reivindicación salarial en distintas zonas al mismo tiempo. Efectivamente, si bien las huelgas fueron en buena medida espontáneas, en su sincronización jugaron un destacado papel los enlaces sindicales ajenos al verticalismo, con lo cual los militantes comunistas pudieron comprobar los primeros resultados del cambio táctico decidido en 1948 e impulsado definitivamente desde el V Congreso, celebrado en 1954. Además, en algunos de estos conflictos aparecieron ya «comisiones» de trabajadores para coordinar las acciones y para negociar con la patronal, como había sucedido ya en años anteriores, aunque de forma muy dispersa.

NUEVA DIRECCIÓN Y NUEVA POLÍTICA

A mitad de los años cincuenta el escenario cambió de forma significativa para los partidos comunistas de la Europa Occidental. En enero de aquel año se celebró el XX Congreso del PCUS que, inesperadamente, supuso el cuestionamiento de la etapa estaliniana. En particular, el «informe secreto» —que revelaba la extensión de la represión y denunciaba los crímenes cometidos— comportó un trauma para los militantes comunistas. El XX Congreso del PCUS y el informe secreto, así como la desestalinización, representaron indudablemente un momento de ruptura decisivo en la definición del universo simbólico comunista. Otros acontecimientos intervinieron también en el cambio de escenario: la crisis polaca y la invasión soviética de Hungría. La subordinación del movimiento comunista internacional a la política

de la URSS, mantenida hasta entonces en nombre del internacionalismo proletario, empezó a debilitarse. Si siempre la identidad comunista se caracterizó por dos rasgos singulares, la dimensión teleológica de un proyecto universalista y la actuación en el seno de la realidad de sociedades singulares,⁸ la fecha de 1956 significó una línea divisoria a partir de la cual la dimensión nacional del comunismo ocupó el centro de la escena, aunque ello no implicara crítica al modelo soviético.

El PCE limitó el impacto de las revelaciones del informe secreto pero, a nivel interno, la dirección parisina articulada en torno a Santiago Carrillo y Fernando Claudín pudo aprovechar la coyuntura para hacerse con la dirección del partido.⁹ Efectivamente, Dolores Ibárruri —y la vieja dirección política del PCE, residente en la Europa Oriental y formada durante la guerra civil— dudó sobre cuáles eran sus apoyos en el nuevo escenario moscovita y en la reunión plenaria del Buró Político, celebrada en Bucarest desde abril a mayo de 1956. Pasionaria aceptó traspasar el liderazgo a la generación de las Juventudes Socialistas Unificadas, con lo que se consolidó definitivamente el núcleo de París, que conocía mucho mejor que los dirigentes residentes en la Europa del Este la situación en España y estaba mucho mejor preparado para incidir sobre ella. Meses antes, en septiembre de 1954, se celebró en Checoslovaquia el V Congreso, el primero tras la guerra civil. A juicio de Santiago Carrillo, su resultado más destacado había sido el comienzo de la renovación de la dirección del partido con jóvenes que, en una proporción significativa, habían vivido en España durante la posguerra y pasado por la cárcel; también era notable la incorporación de intelectuales.¹⁰ Fernando Claudín e Ignacio Gallego se integraron como miembros de pleno derecho al Buró Político y también se incorporaron en él Gregorio López Raimundo, Simón Sánchez Montero, Santiago Álvarez, Jorge Semprún, Francisco Romero Marín y Tomás García. Simón Sánchez Montero, junto con Juan Soler y Luis Lucio Lobato, fueron encargados de la dirección en Madrid,¹¹ y a ellos se uniría poco después Francisco Romero Marín, *Aurelio*, quien se convertirá en pieza clave de la continuidad del aparato clandestino en Madrid, pues conseguirá no ser detenido hasta 1974.¹² Al margen, Jorge Semprún se encargaba de la relación y organización de intelectuales y estudiantes, pero no formaba parte del Comité de Madrid.

Uno de los puntos de acuerdo en la nueva dirección era la necesidad de superar definitivamente los estragos de la guerra civil, presen-

tando un programa mínimo para el establecimiento de un régimen democrático al que pudieran sumarse distintos sectores sociales y políticos. Era la estrategia de Reconciliación Nacional, una propuesta en la que también influyó la incorporación de España a la ONU a finales de 1955, símbolo de la aceptación internacional de la dictadura franquista y, por tanto, también de la inutilidad de cualquier política de futuro basada exclusivamente en la ilegitimidad de origen del régimen.

La declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español», fue aprobada en junio de 1956¹³ y ratificada en el Comité Central de agosto, pero la mayor parte de las ideas directrices de los documentos de 1956 habían sido expresadas con anterioridad, reflejando la gestación progresiva de una política en modo alguno improvisada al calor de los acontecimientos de ese año crucial.¹⁴ En ese sentido es significativa la alocución de Dolores Ibárruri del 18 de julio de 1955 que proclamaba la necesidad de «atraer al campo de la democracia a aquellos que están deseando abandonar las banderas franquistas, sin preguntarles cómo pensaban ayer, sino cómo piensan hoy y qué quieren para España». ¹⁵ Igualmente, ya en marzo de 1956, Santiago Carrillo había enunciado en un editorial de la revista *España* «la idea de superar la línea divisoria de la guerra civil, la necesidad de concebir una perspectiva política sin venganzas ni segundas vueltas». ¹⁶ A destacar el contenido de estas dos líneas pues, contra la presentación que a finales del siglo xx se hizo de la Declaración de Reconciliación Nacional, ellas sintetizan su sentido político: el rechazo de la idea de venganza y establecer un horizonte de futuro. No se propugnaba una reconciliación en abstracto sino una voluntad de no mirar atrás, de aunar fuerzas con quienes rechazaban la dictadura y estaban dispuestos a luchar por la democracia.

La declaración es reflejo de la voluntad del PCE de reaccionar con premura al nuevo marco internacional y, sobre todo, nacional, que los dirigentes comunistas percibían como muy dinámico; en este sentido, la declaración permite observar nuevamente la disponibilidad del PCE para adaptarse a nuevas condiciones y para aprovechar cualquier pequeño cambio que se diera en la sociedad española, aunque en muchas ocasiones las conclusiones a las que llegaba se caracterizaran por altos niveles de irrealismo político en relación sobre todo con la crisis del régimen. Así, después de afirmar que «un estado de espíritu favorable a la reconciliación nacional de los españoles va ganando a las fuerzas político-sociales que lucharon en campos adversos durante la guerra

civil», y ante la inminencia del XX aniversario del comienzo de la guerra civil, «el Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco».

La nueva formulación se apoyaba en un análisis catastrofista de la realidad.¹⁷ Lejos de lo que se presuponía, la dictadura conseguiría superar la crisis económica en la que estaba inmersa en 1956. Tampoco se ajustaba a los hechos el análisis de la evolución política de los apoyos del régimen. Sin embargo, en poco tiempo, se fue evidenciando que el discurso de mano tendida sin mirar atrás para acabar con la dictadura era atractivo para sectores inquietos políticamente: en el espacio obrero resultaban esenciales los cambios que habían experimentado los movimientos apostólicos por su propia evolución, pero también porque en ellos se habían refugiado jóvenes procedentes de familias identificadas con los «vencidos», que habían enviado allí a sus hijos como mecanismo de protección. No solamente los activistas católicos y jóvenes obreros; a mediados de los cincuenta se estaba produciendo el despertar de estudiantes e individuos con inquietudes vitales que consideraban despreciable el entorno que les rodeaba. Una parte de estos sectores, que se convirtieron en poco tiempo en nuevos sujetos políticos, procedían de familias identificadas con el régimen. Javier Pradera, uno de los jóvenes protagonistas de la conmoción universitaria de 1956, puso el énfasis en la relectura de la guerra civil que hizo una parte de los jóvenes hijos de los vencedores para explicar el paso a las filas antifranquistas. Para los círculos estudiantiles madrileños fueron importantes las reflexiones de Dionisio Ridruejo, quien afirmaba que la lucha de clases fue la clave para el desencadenamiento de la guerra civil, pero que lo que dio fuerza a la insurrección fueron las creencias de los que apoyaron el golpe de Estado.¹⁸ Para los jóvenes de familias franquistas, que habían sufrido también la violencia desatada en la zona republicana, fue importante la actitud de discernir entre la guerra como vivencia subjetiva y la conspiración oligárquica que pretendía acabar con los avances sociales republicanos. Esta distinción fue esencial para luchar por una nueva España, rechazando el franquismo pero sin romper con los orígenes familiares.¹⁹

También se estaba produciendo una reflexión entre los cuadros del partido. Un informe del interior, fechado en julio de 1963,²⁰ es bien ilustrativo de la sensibilidad ante el componente humano de la activi-

dad política que se fue abriendo paso. Aunque el informe iba dirigido a la dirección, su redacción parece destinada a esclarecer para sí mismos cuál era la esencia de la política de reconciliación: la unión del pueblo para la lucha y la derrota de la dictadura. Así, después de sintetizar cómo se inscribía la nueva política en la estrategia del partido, señalaba:

Más a ras de tierra, la política de reconciliación nacional tiene en cuenta que si bien nuestro Ejército y la República representaban en general la causa y los intereses del pueblo, por una serie de razones, una parte del pueblo luchaba en las filas de Franco. Los campesinos de Castilla, de Navarra, de Galicia, de parte de Extremadura y Andalucía que estaban en las filas de Franco, ¿no eran acaso pueblo? ¿No lo eran también las gentes de la clase media que estaban en el mismo campo? ¿Se puede concebir una política popular, en la España de hoy, sin contar con esas partes tan importantes de nuestro pueblo? ¿Se puede concebir tal política sin contar con la juventud, que es hija de los que lucharon tanto en un bando como en el otro? Pues justamente por eso es necesario abolir la división del 36-39 y sustituirla por la verdadera división de hoy, entre pueblo y dictadura. [...] la reconciliación no tiene nada de “pacto” con los que oprimen al país, es una política revolucionaria enderezada directamente contra ellos.

Fijar la mirada en el futuro y asegurar la conexión con las nuevas generaciones era la cuestión nuclear. Como se informaba desde Andalucía en 1966, «los hijos de uno y otro lado se han casado sin tener en cuenta “la divisoria de la guerra”, de tal forma que la sociedad es hoy esa realidad de reconciliación y eso se ve en todos los aspectos de la vida».²¹

Hay que resaltar que en la declaración de 1956 también aparecían casi todos los elementos guía de la etapa posterior: acciones reivindicativas que afectaban a la cotidianidad, utilización de la legalidad, la lucha contra la dictadura como eje prioritario del activismo, etc. Se inauguraba así una nueva etapa en que las grandes proclamas políticas iban acompañadas de actuaciones de «baja intensidad» destinadas a ampliar lo que después se denominará «espacios de libertad». En este sentido, se afirmaba:

Los comunistas estamos dispuestos a establecer los acuerdos, pactos, alianzas y compromisos necesarios para lograr reivindicaciones parciales, políticas y económicas, de sentido democrático, en cualquier sector

de la vida nacional, incluso con fuerzas que no se plantean aún luchas por la abolición de la dictadura, y que por el momento solo propugnan demandas de carácter parcial. Los comunistas estamos dispuestos a apoyar todo lo que represente un paso adelante en el mejoramiento de la situación del pueblo y a marchar con cuantos vayan por ese camino aunque discrepemos en otros aspectos.

Romper el aislamiento era, igualmente, un objetivo fundamental por lo que, también en ese terreno, en la declaración el PCE se mostraba abierto a avanzar lentamente:

La perspectiva del cambio pacífico, de la supresión de la dictadura sin guerra civil, presupone un cierto período durante el cual las fuerzas de izquierda y de derecha, al mismo tiempo que actúan contra la política de la dictadura en diferentes terrenos, van reagrupando sus fuerzas, relacionándose entre sí, al principio con objetivos parciales, mientras no maduren las condiciones para realizar acuerdos sobre objetivos más amplios.

Fueron estos principios los que se enfatizaron un año después, en el Comité Central celebrado en septiembre de 1957: la nueva política trataba de ser «el comienzo de toda una transformación de hábitos y costumbres arraigados en la vida política española durante más de un siglo» para permitir «el día de mañana contender en el Parlamento, en los Municipios, en las organizaciones sociales, en la Prensa, en la tribuna, a través de la actividad democrática en las masas del pueblo, y no en el campo de batalla de la guerra civil».²²

Aunque no inmediatamente, la adopción de la política de Reconciliación Nacional fue determinante para abrir nuevas posibilidades para la lucha antifranquista y para el propio crecimiento del PCE, aunque eso se podrá observar una década después, cuando la ruptura generacional se convierta en un elemento decisivo del activismo político.

Ya antes, sin embargo, la política de Reconciliación Nacional despertó la preocupación en las filas del régimen, como muestra un documento de 1958 que, aun sin ir firmado, es posible atribuir por sus características al entorno de Manuel Fraga, o directamente a él, quien en 1956 había sido nombrado subdirector del Instituto de Estudios Políticos y, al año siguiente, delegado nacional de Asociaciones. El documento trataba de la necesidad de modificar la propaganda política y, en ese marco, propugnaba impulsar un plan de contrapropaganda

para neutralizar los efectos de las propuestas del antifranquismo. Específicamente se refería a la política de Reconciliación Nacional, una idea que debía «combatirse con la propaganda no oficial y sobre la base de aparentar la existencia de otros grupos de oposición disconformes con la idea de reconciliación». Para conseguirlo, se debía preconizar la «depuración de responsabilidad de todos cuantos hayan colaborado con el Régimen, en cualquier aspecto o desde cualquier puesto político, electivo, municipal, etc.». ²³

LA HUELGA NACIONAL POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA ANTIFRANQUISTA

En la disponibilidad para las huelgas de 1956 habían influido de forma destacada las actitudes de una nueva generación obrera que, si bien no había podido recibir la cultura sindicalista de sus mayores —muertos, exiliados o represaliados—, en sentido contrario, no sentía con la misma intensidad los traumas de la guerra y la posguerra y, por lo tanto, podía superar la pasividad algo más fácilmente. Ese cambio generacional fue mucho más visible en la universidad y en 1956 apareció un nuevo sujeto político que preocupó extraordinariamente a los dirigentes franquistas desde entonces: el movimiento estudiantil. Desde el inicio de la década de los cincuenta empezó a manifestarse entre la juventud universitaria una inquietud cultural, que inicialmente no era política, pero que con facilidad podía politizarse. Jorge Semprún, instalado en Madrid desde 1953 como responsable de la política cultural del partido, encontró en un grupo de universitarios —entre los que destacaba Javier Pradera— a activistas capaces de articular propuestas concretas con las que dinamizar la vida universitaria y a la vez hostigar a la dictadura.

Las protestas obreras y, sobre todo, estudiantiles de 1956 hicieron pensar a la dirección del PCE en el exilio que las condiciones habían madurado rápidamente y era posible forzar la máquina de la movilización. Así, en 1957 la presión sobre los militantes para que se presentaran a las elecciones sindicales verticalistas fue importante y, en enero, en Madrid y Barcelona se intentó reproducir el boicot a los transportes que tanto impacto tuvo en 1951 en la capital catalana. Según distintos testimonios, la «huelga de tranvías» de enero fue de mayor alcance y duración que la de 1951; ²⁴ en Barcelona, durante más de diez días, los tranvías circularon vacíos para regocijo de una

parte de la ciudadanía que, disciplinadamente, se dirigía a pie a sus ocupaciones.²⁵ Sin embargo, la repercusión fue menor que en 1951, porque el marco general había cambiado y, sobre todo, el régimen había aprendido de la experiencia y tomó las medidas necesarias para evitar su impacto. Un año después, se impulsó también un movimiento huelguístico que tuvo éxito en Asturias, País Vasco y Cataluña,²⁶ al que la dictadura respondió con una represión durísima que, en el caso barcelonés, logró desarticular los núcleos de militantes obreros que se habían formado desde 1951 y atemorizar al resto de trabajadores.²⁷

A pesar de la represión desatada en 1958, la dirección comunista no desistió de convocar movilizaciones de carácter estrictamente político para provocar el derrumbamiento inmediato del régimen. La primera —Jornada de Reconciliación Nacional—, el 5 de mayo de 1958, y la segunda —Huelga Nacional Pacífica—, el 18 de junio de 1959, que además contó con la participación de grupos socialistas como el FLP, el MSC, la ASU y otros núcleos clandestinos todavía más reducidos, pero que con su firma visualizaban una pluralidad del antifranquismo, que existía poco más que en el papel pero que era fundamental para el desarrollo de las tácticas unitarias comunistas.

Estas convocatorias deben inscribirse en la convicción comunista de que un régimen como el franquista no podía ser derrocado sin más. Abandonada la lucha armada, consideraban imprescindible presentar otras formas de acciones de masas que pudieran sustituir el levantamiento armado y, en ese contexto, apareció como alternativa la huelga nacional.²⁸ El voluntarismo comunista enraizaba en la determinación de influir sobre los acontecimientos. Antonio Gramsci ya señaló que «se “prevé” en la medida en que se actúa».²⁹ Desde la perspectiva estratégica, este tipo de convocatorias respondían a una lógica: exigían poner en tensión la parte más dinámica del antifranquismo y observar hasta dónde se podía llegar;³⁰ la propia demostración de que «se actuaba» atraía a las filas de la organización a los «espíritus inquietos» que siempre existen en cualquier sociedad. No debe olvidarse tampoco que estas convocatorias forzaban a la dictadura —en un momento de apertura al exterior— a realizar un gran despliegue represivo, que en sí mismo recordaba las características del régimen. Por otro lado, esas convocatorias permitían ponerse en contacto con otros núcleos opositores e intentar así desarrollar una política de alianzas, sumamente necesaria para los comunistas, que podían ser el núcleo clandestino antifranquista más importante, pero que se encontraba per-

manentemente aislado por el contexto de guerra fría; las convocatorias en sí también eran un factor de propaganda eficaz, aunque su seguimiento fuera muy reducido.³¹

Todo ello no está en contradicción con los altísimos costes humanos que tuvieron dichas acciones. Al subjetivismo imperante en la dirección³² en el exilio —según el cual la disponibilidad para la movilización era extraordinaria— cabe añadir la necesidad de la dirección parisina encabezada por Santiago Carrillo de transmitir ante los veteranos dirigentes instalados en la Europa Oriental una decidida estrategia de enfrentamiento con la dictadura.³³ Si bien la huelga de 1959 puede ser considerada como la primera gran acción de propaganda en España, de forma inmediata la organización en el interior se resintió. *Lucha Obrera*, órgano de expresión de la Oposición Sindical Obrera, admitió que «es verdad que los obreros de grandes empresas de Madrid, Vizcaya, Barcelona, Asturias, Valencia y Sevilla, no hicieron huelga en la medida de sus deseos».³⁴ Dichos fracasos comportaron centenares de detenciones —por ejemplo, Simón Sánchez Montero—, muchas de ellas preventivas, y volvieron a demostrar que la mayoría de los trabajadores no secundaban convocatorias lanzadas por directorios políticos, desvinculadas de reivindicaciones concretas sobre condiciones de vida y de trabajo que, además, eran altamente peligrosas. Aunque la consigna de huelga general permaneció, no se volvió a repetir una experiencia como aquélla, pues la convocatoria de octubre de 1967 tuvo un carácter más sindical y fue un llamamiento de Comisiones Obreras.

En su informe al VI Congreso, Santiago Carrillo casi pasó por alto el fracaso de aquellas jornadas,³⁵ poniendo el énfasis en la estrategia a medio plazo a la vez que reafirmando la política de movilización de masas ante los más veteranos dirigentes procedentes de la guerra civil:

El V Congreso había proclamado, frente a la incredulidad y las dudas de ciertos elementos, que lo que decidiría el curso de la situación en España sería la lucha de las masas y que la tarea esencial del Partido era promover, organizar, desarrollar esa lucha. El V Congreso subrayó la necesidad de prestar suma atención a las pequeñas acciones, a las pequeñas luchas; tras ellas vendrían las grandes.³⁶

Así, el fracaso de 1958 y 1959 redundó en la práctica en la apuesta por el activismo social.

Por otra parte, el VI Congreso del Partido celebrado en los últimos días de 1959 y primero de 1960 significó la confirmación definitiva del cambio generacional en la dirección, iniciado ya en 1956. Santiago Carrillo fue nombrado secretario general y Dolores Ibárruri se convirtió en presidenta. Con Santiago Carrillo se consolidó en la dirección el grupo emergente formado por Fernando Claudín, Jorge Semprún, Tomás García, Ignacio Gallego, Francisco Romero Marín, Simón Sánchez Montero y Santiago Álvarez, entre los más destacados. Se incorporaron al Comité Ejecutivo Ramón Ormazábal, José Benítez Rufo y Horacio Fernández Inguanzo.³⁷ Años más tarde, Jordi Solé Tura calificó de bueno el programa que allí presentó Claudín y que fue aprobado: bajo la etiqueta de «política de reconciliación nacional» se apostaba por la unidad antifranquista que, culminando con una huelga general pacífica, acabaría con la dictadura; restablecimiento de las libertades políticas sin discriminación; amnistía general para los dos bandos de la guerra civil;³⁸ mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general; política exterior favorable a la coexistencia pacífica y elecciones constituyentes con plenas garantías democráticas para escoger libremente entre monarquía y república.³⁹

El programa aprobado era muy moderado. En realidad, en el corto plazo, no se distinguía de los propugnados por la socialdemocracia. Se podría decir incluso que, dado que la socialdemocracia había abandonado su voluntad de sustituir al capitalismo, los comunistas desempeñaban en la segunda mitad del siglo xx el papel que los socialdemócratas habían detentado durante décadas. Como ha señalado Santos Juliá, la concepción del futuro en grandes etapas dará lugar a un programa con objetivos inmediatos y objetivos finales: la concepción de la llegada al socialismo como un desarrollo de la democracia que ocurre por una acumulación progresiva de reformas, sin derramamiento de sangre, sin violencia, por medios democráticos y parlamentarios se convirtió en el programa comunista. Así, en la segunda mitad del siglo xx el militante comunista era un revolucionario que no hacía la revolución, aunque la esperaba, y por eso combatía y arriesgaba y, si era de la madera de los Sánchez Montero, soportaba las torturas sin delatar a sus compañeros.⁴⁰